

*El dilema ya no es patria o traidores.
Es libertad o servidumbre.
Es democracia o crimen organizado.
El desafío es grande.*



**LUIS CARLOS
UGALDE**

luiscarlosgalde@integralia.com.mx

Votos o balas

"Si no gana Rocha los vamos a matar a todos".

Era la madrugada del 6 de junio de 2021, día de elecciones en Sinaloa. Un joven con radio en mano vigilaba a un grupo de operadores electorales secuestrados. Llevaban horas con las manos atadas y los ojos vendados, trasladados de una casa a otra sin saber si saldrían vivos. Los captores preguntaban dónde estaba el centro de operación, dónde se reunían los representantes de casilla y dónde se guardaban recursos para movilizar votantes. No buscaban únicamente intimidar: querían desactivar la maquinaria electoral opositora y garantizar el triunfo de Morena.

No lo dijo la ultraderecha de Estados Unidos, sino las propias víctimas, según documentó *Ríodoce* una semana después de la elección. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en Badiraguato. Guadalupe Iribe, candidata opositora a la presidencia municipal, había recibido amenazas desde el inicio de la campaña. Primero secuestraron a

uno de sus operadores. El día de la elección levantaron a su hermano y a varios colaboradores. Los golpearon y mantuvieron retenidos mientras se votaba. Esa mañana Iribe lloraba desconsolada: estaba dispuesta a renunciar con tal de recuperar a su familiar.

En Culiacán ocurrió algo semejante. Buena parte de la estructura de Faustino Hernández, candidato opositor a la alcaldía, fue inmovilizada por los narcocomandos. A pesar de ello, la diferencia final fue menor a cinco puntos. Después de la elección, Hernández pronunció una frase devastadora: "Si me hubieran dicho, yo me bajo". No era cobardía, sino el reconocimiento de una realidad elemental: cuando las balas sustituyen a los votos, la democracia deja de existir.

Esta es la cara verdadera de una democracia secuestrada por el crimen organizado. No se trata únicamente de dinero ilegal en las campañas o de autoridades complacientes con los delincuentes. Se trata de violencia material: secuestros, amenazas, golpes y coac-

ción. De hombres armados que deciden quién puede competir, quién puede hacer campaña y qué ciudadanos pueden ejercer sus libertades más básicas.

Eso es lo que está en juego con el caso Rocha Moya. Las acusaciones deben probarse en tribunales y respetarse las garantías del debido proceso. Pero convertir el asunto en una disputa sobre soberanía frente a Estados Unidos equivale a ignorar la otra soberanía amenazada: la del Estado mexicano frente a organizaciones criminales que se apoderan de territorios y roban elecciones.

La Presidenta ha pasado semanas pidiendo "pruebas" y desde el domingo acusando a la ultraderecha estadounidense de estar detrás de esta confabulación. Así dejó pasar una oportunidad para adoptar medidas preventivas de cara a las elecciones de 2027. La semana pasada se aprobaron reformas en materia electoral, incluida una causal de nulidad por intervención extranjera. Sin embargo, no se incorporó una cau-

sal equivalente para anular elecciones cuando exista intervención probada del crimen organizado: una injerencia violenta, tangible y devastadora para las libertades ciudadanas. En su lugar, se aprobó una comisión para verificar antecedentes de candidatos. Es una medida insuficiente y superficial frente a la magnitud del desafío.

Para efectos prácticos, en una porción significativa del territorio nacional se celebran elecciones formalmente democráticas, pero los barones locales deciden de antemano quién puede ganar y quién debe perder. Ahí, en esos municipios, la democracia es una ficción. El riesgo es que el modelo siga creciendo: que pase del ámbito municipal a más gobiernos estatales y alcance niveles aún más altos del poder político.

"México no es piñata de nadie", dijo la Presidenta. Pero la defensa de la soberanía no puede limitarse a responder a Washington. También exige recuperar los territorios en los que el Estado ha cedido el control a los criminales; impulsar reformas serias para contener la penetración del crimen en los procesos electorales; y fortalecer las fiscalías mexicanas para que no sean jueces de otros países quienes pretendan juzgar a nuestros criminales.

En medio de la polarización, conviene recordar que el dilema no es patria o traidores. Es libertad o servidumbre. Es democracia o crimen organizado. Es votos o balas.